

# CAPÍTULO OCTAVO

## EXPULSIONES DE PUEBLOS AFRODESCENDIENTES EN COLOMBIA: TRÁNSITOS Y CONFINAMIENTOS EN GEOGRAFÍAS PRECARIAS

Ángela Yesenia OLAYA REQUENE

**SUMARIO:** I. *Introducción*; II. *Expulsiones*; III. *Despojos y narcotráfico*; IV. *Confinados en la expulsión*; V. *Conclusiones*; VI. *Bibliografía*.

### I. INTRODUCCIÓN

El Pacífico colombiano es una región caracterizada por una inmensa riqueza ecológica, hidrográfica, mineral y forestal. Desde el Darién en la frontera norte con Panamá, hasta el río Mira, frontera con Ecuador, constituye uno de los territorios con mayor biodiversidad en el mundo. Esta región comprende la totalidad del departamento del Chocó y las zonas costeras de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Tiene una población de 1.5 millones de habitantes aproximadamente, siendo el 90% de estos pueblos afrocolombianos. Las formas de organización social, cultural y territorial de la población afrocolombiana integra diversos patrones de apropiación espacial de las costas, ríos, manglares y esteros. Estos espacios también constituyen los lugares de representación o resistencias con que enfrentan las violencias y conflictos socioeconómicos que amenazan la estabilidad de sus lugares.

La riqueza en recursos naturales convierte a la región Pacífico en una plataforma estratégica para el desarrollo de economías extractivas (proyectos minero-energéticos, agro-industriales, hídricos, forestales e infraestructurales). Las zonas selváticas y de frontera marítima, caracterizadas por una densa vegetación y un tejido de caudalosos ríos como el Atrato, el San Juan, el Baudó, el Mira y el Patía, son disputados por grupos armados ilegales

(guerrillas, disidencias, paramilitares, narcotraficantes) para el desarrollo de la cadena productiva del narcotráfico: cultivos de coca, procesamiento de base de coca y tráfico de cocaína y con ello la instalación de un escenario privilegiado del conflicto armado interno. Las fuerzas económicas que hacen presencia en el Pacífico disputan las formas de organización social de la región y representaciones culturales que históricamente han construido los pueblos afrocolombianos como “un territorio ancestral de grupos étnicos”,<sup>1</sup> grupos culturalmente diversos con sistemas de pensamiento propio articulados a formas de movilización política y organizativa que buscan el reconocimiento de derechos territoriales y culturales. Situación que ha generado un patrón de violencias y despojos de tierras y territorios que conlleva: explotación de los recursos naturales, confinamientos, asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos forzados de la población afrocolombiana.

La Agencia de la ONU para los Refugiados señala que Colombia, después de Siria, ocupa el segundo lugar con mayor índice de desplazamiento forzado, con 8 millones de desplazados forzados la mayor parte de ellos (98%) dentro del país.<sup>2</sup> En cuanto al registro de desplazamiento forzado de la población afrocolombiana el informe del Registro Único de Víctima informa que, entre 1985 y 2019, 792.540 personas afrocolombianas han sido víctimas de desplazamiento forzado.<sup>3</sup> Esto quiere decir que del total de la población desplazada en el país el 10% corresponde a la población afrocolombiana.

Dada la imposibilidad de sistematizar y analizar la totalidad de los conflictos que actualmente tienen lugar en la región Pacífico, el capítulo se centra en las dinámicas económicas y accionar criminal que generan desplazamientos forzados de la población afrocolombiana. Se propone la categoría de “expulsiones” para referir a la sistematicidad de esos desplazamientos y sus imbricaciones con las estrategias de destrucción de tierras y territorios que imponen los actores sociales que movilizan economías extractivas y cultivos ilícitos. El desplazamiento guarda relación, también, con la imposibilidad de impulsar un desarrollo

socioeconómico acorde con las estrategias culturales, ecológicas y económicas de producción de los pueblos afrocolombianos, en contraposición al modelo extractivista que obliga a la población a abandonar sus tierras.

Con frecuencia la población afrocolombiana expulsada del Pacífico acaba confinada en “geografías precarias”, concepto que hace referencia a los márgenes de las grandes urbes o barrios urbanos de los municipios que conforman la región, donde continúan los riesgos, las amenazas, las violencias y una agudización de la vulneración de estas poblaciones. Mientras que la espacialidad de sus lugares de origen deviene en espacios para la guerra y la movilidad de economías criminales.

La antropología ha abordado la construcción de los márgenes desde diferentes acepciones como lugares “aislados” y “olvidados”, o desde una mirada más política que implica analizar a los márgenes como lo “no importante” o “desdeñable” donde se configuran jerarquías racializadas de dominación que relegan y excluyen a poblaciones específicas. Veena Das y Deborah Poole, proponen entender los márgenes como la periferia en donde se localizan aquellas personas consideradas por los dispositivos de poder del estado insuficientemente socializadas en los marcos de la legalidad.

Las poblaciones marginales están conformadas por sujetos “indígenas” o “naturales”, que son considerados, por un lado, el fundamento de identidades nacionales particulares y, por el otro, son excluidos de esas mismas identidades por esa clase de conocimiento disciplinario que los marca como “otros” raciales y civilizaciones.<sup>4</sup>

De acuerdo con lo anterior, los márgenes sugieren modos diferentes de ocuparlos, pudiendo ser narrados, por un lado, como relatos de exclusión y precarización de determinadas formas de vida y, por otro, también resaltan la manera diferencial en que se constituye las relaciones entre el estado y los grupos sociales atendiendo a rasgos distintivos como la raza, la cultura, la religión o el territorio; pero, también, desde las experiencias de pueblos y personas en condición de desplazamiento forzado para quienes los márgenes

son los lugares en donde levantan viviendas precarias, con paredes y techos de cartón, plástico reutilizado, tablones de madera y bloques de cemento, buscando restablecer un proyecto de vida individual o colectivo.

La población afrocolombiana desplazada de las zonas rurales del Pacífico generalmente busca reasentarse sobre asentamientos urbanos de *bajamar* ilegalmente ocupados, denominados “invasiones”; caracterizados por una extrema precariedad social y económica. En esos lugares grupos armados y carteles del narcotráfico que se disputan el control de los territorios para el microtráfico de drogas terminan por expulsar a las personas que han vivido desplazamientos previos y también a los habitantes de los barrios en situación de pobreza. Los terrenos de bajamar también son espacios altamente codiciados por el gobierno nacional y las élites empresariales para el desarrollo de proyectos de expansión portuaria, tales como puertos pesqueros o malecones que llevan frecuentemente a enfrentamientos violentos y desplazamientos forzados de la población local.

*Vaciar unos territorios y sobre poblar otros* es una estrategia de un capitalismo por despojo para deslocalizar a los pueblos locales. En dicho proceso a la vez que se expulsa de la vida territorial, social y ecológica a las personas confina sus tránsitos en espacios de altas vulnerabilidades, riesgo y empobrecimiento. En el Pacífico, con frecuencia los tránsitos de las personas expulsadas se movilizan en lo que Ariadna Estévez ha llamado “*Los bolsones de desechabilidad*”, entendidos como:

Áreas de injusticia espacial en las que poblaciones vulnerables, especialmente migrantes, son forzadas a vivir en condiciones inhumanas y mercados laborales ilegales con una aprobación táctica de los gobiernos que deberían, en teoría, y bajo la legislación de derechos humanos, ser protector.<sup>5</sup>

El capítulo se divide en tres secciones. En la primera, se analiza la categoría de expulsiones y su articulación con los desplazamientos forzados en la región Pacífico. En la segunda, se aborda las lógicas actuales del despojo producido por las economías extractivas y cultivos ilícitos, así como los mecanismos de expulsión, violencias y

segregación contra los pueblos afrocolombianos. En la tercera sección, a través de testimonios de personas en situación de desplazamiento en la costa pacífica nariñense, se describen los trayectos y experiencias de confinamiento en zonas urbanas de bajamar, lugares en que se producen cíclicas expulsiones, y a la larga, una prolongación de las violencias y la pobreza. Las narrativas de estos trayectos permiten comprender los movimientos de huida o dirigidos a procesos de re-territorialización en geografías precarias.

Los testimonios presentados en este capítulo son el resultado del trabajo de campo para la realización de una tesis doctoral sobre los flujos de movilidades de comunidades afrocolombianas en la frontera colombo-ecuatoriana, se analiza la movilidad circular/multirresidencial y forzada, esta última en el contexto del conflicto armado colombiano.

## II. EXPULSIONES

Saskia Sassen propone que el concepto de expulsiones nos lleva más allá de la idea familiar de desigualdad creciente como forma de aludir a las patologías del capitalismo global hoy. Para esta autora, las migraciones, desalojos, desplazamientos forzados, guerras, crisis financieras, desastres ambientales, encarcelamientos de poblaciones y otros fenómenos de escala masiva, no se tratan de fenómenos aislados o desarticulados de la constitución de la economía global; sino que hacen parte de las formaciones predatorias del capitalismo contemporáneo que en sus imbricaciones a escala local y global genera niveles de desigualdad extrema en buena parte del mundo.

La complejidad de las formaciones económicas que van desde el crecimiento de los instrumentos financieros, hasta el avance de formas de conocimiento e inteligencia y la disposición de una geografía de la extracción de recursos naturales, dice la autora, ha generado “un fuerte crecimiento de la cantidad de personas expulsadas de los órdenes sociales y económicos centrales de nuestro tiempo”.<sup>6</sup> Esas expulsiones no son espontaneas, sino

hechas. Los ordenamientos políticos-económicos en que las expulsiones tienen lugar:

Casi siempre han servido para desmembrar lo social a través de la desigualdad extrema, para destruir buena parte de la vida de clase media prometida por la democracia liberal, para expulsar a los pobres y los vulnerables de tierras, empleos y hogares, y para expulsar a trozos de la biósfera de su espacio vital.<sup>7</sup>

Un ejemplo de lo anterior es el acaparamiento de tierras agrícolas por países como Reino Unido, China y Arabia Saudita en países del África subsahariana y América Latina para el cultivo de alimentos o destinadas para los cultivos industriales, principalmente palma africana para la producción de biocombustible. Situación que ha generado masivas dinámicas de despojo de comunidades agricultoras en un ambiente frágil de reconocimiento de los derechos territoriales por parte de los gobiernos a las comunidades locales. Según Sassen, la particularidad de esas expulsiones es que la mayoría de esas personas nunca regresarán a su lugar de origen: su lugar de origen es ahora una zona de guerra, una plantación, una operación minera o una tierra muerta.

Otro ejemplo son los flujos de migración camerunés en tránsito por México.<sup>8</sup> Con la escasez de nuevas tierras en Indonesia y Malasia para la producción de aceite de palma, compañías internacionales buscan oportunidades en Camerún y otros países de África central y occidental. Como resultado la empresa Socapalm, la mayor compañía privada para la producción de aceite de palma en Camerún ha acaparado al rededor del 70% de las tierras de los pobladores locales. Pequeñas y medianas granjas antes dedicadas a la producción de economías agrícolas y pesca artesanal para el sustento de la población local, ahora son centros para el cultivo y producción de aceite de palma. Situación que, además de generar un progresivo empobrecimiento de los pequeños agricultores, contaminación de las fuentes de agua y bajos salarios de los trabajadores en las plantaciones, también ha motivado la expulsión con alcance transcontinental de la población camerunés, principalmente de zonas rurales.

En la región Pacífico, las expulsiones contemporáneas están

imbrincadas con los procesos histórico de racialización de los territorios y pueblos afrocolombianos. Desde mediados del siglo XIX, la élite política-intelectual colombiana, comenzó a gestar las primeras representaciones de la nación mediante mecanismos de homogeneización y diferenciación de las regiones y pueblos en función de la “raza”. La producción ideológica de la raza remite a lógicas distintas de organización de los territorios y grupos sociales a partir de atribuir características fenotípicas racializadas, como el color de piel, textura del cabello, rasgos físicos, que se mezclan con supuestas diferencias cognitivas, genealógicas, sexuales y de reproducción social.

La raza estableció la diferencia de la superioridad territorial de los altiplanos frente a las tierras llanas, las selvas y las costas lo que estaba acompañado de una fuerte marcación racial de los habitantes de estos territorios.<sup>9</sup> La superioridad racial, el dominio geográfico y el progreso estaba en los altiplanos habitados por mestizos; las tierras llanas, las selvas y las costas representaban sectores subalternos poblados por indios, negros y mulatos.

Los alcances de los imaginarios racistas que vinculan espacios, ambientes y subjetividades concretas desembocaron en una violenta fabricación del Pacífico y los pueblos afrocolombianos; ambos han sido continuamente reducidos a un mismo significado: una forma de vida adosada de imágenes proferidas de precariedad y degradación. Dando lugar a la formación de una región racializada como una vía para localizar, señalar y clasificar ha estas poblaciones. El Pacífico fue construido desde estereotipos racistas como una región paradigmáticamente “aislada” e “inhóspita” y sus pobladores representados como “salvajes” e “incivilizados” siendo marginada del proceso de configuración del Estado-nación, tanto en el plano simbólico-identitario como en el terreno fáctico institucional.

Los discursos racistas que imponen la superioridad de unos grupos sociales y territorios sobre otros sostienen prácticas de explotación de los recursos naturales y de opresión, en algunos casos, de exterminio de poblaciones enteras. Para la región Pacífico, esos discursos han estado acompañados de unas estrategias de localización del capital que abre el camino para las operaciones

extractivas y los cultivos ilícitos. Durante la primera mitad del siglo XX las políticas de apertura económicas promovidas por el Estado colombiano, integran al Pacífico “como una entidad desarrollable”<sup>10</sup> mediante la explotación de maderas finas, tagua, caucho y minería, este último se extiende hasta la actualidad junto con el monocultivo de la palma africana para la producción de biodiesel y su posterior comercialización en mercados internacionales.

Las desigualdades sociales y el racismo estructural que definieron la situación histórica de las poblaciones afrocolombianas se agravan y transforman al ser sus territorios escenarios de diferentes botines para la guerra y explotación de los recursos naturales. Producto de las exigencias y reivindicaciones políticas de las organizaciones afrocolombianas el estado ha suscripto una serie de obligaciones para el desarrollo y combate a la pobreza en estas comunidades de acuerdo con sus prácticas tradicionales y el derecho a la propiedad colectiva (véase la Ley 70 de 1993). Sin embargo, las acciones estatales se han encaminado a la incorporación de modelos económicos agroindustriales y extractivos (con sus mercados nacionales e internacionales, ejércitos y tecnologías) a nombre del desarrollo de la nación, lo que ha llegado a reforzar condiciones de extrema precariedad y violentos procesos de expulsión de estas poblaciones.

Los proyectos desarrollistas promueven la integración del Pacífico desde el punto de vista de la infraestructura de transporte, conectividades de vías fluviales, embarcaderos fluviales mayores y muelles portuarios, pensados para abrir un sistema de comunicación que conecte al interior andino con los mercados de los países limítrofes de Centroamérica y el Caribe. Ese discurso, y sus prácticas correlativas, llega a justificar la presencia e intervención de varias fuerzas políticas, sociales económicas y armadas en la región.

Por ejemplo, en 2006 se creó la organización Promotora Arquímedes S.A., con el propósito de construir y operar el puerto marítimo de Tribugá en el departamento del Chocó, que “fortalecerá la presencia de Colombia en la cuenca del Pacífico”.<sup>11</sup> Sin embargo, ambientalistas, defensores de derechos humanos, líderes



sociales y organizaciones no gubernamentales, han advertido que la construcción del puerto tendría impactos funestos para el medioambiente y la población local, entre ellos la pérdida de biodiversidad que implicaría construir carreteras y trenes en medio de la selva. Esos proyectos económicos avanzan en un ambiente de flexibilización del ordenamiento jurídico establecido para amparar al medio ambiente y los derechos étnico-territoriales de las comunidades étnicas.

En ese sentido, se producen efectos como el desconocimiento de la consulta previa, libre e informada, todo con el propósito de facilitar el acceso de las multinacionales y la explotación de los recursos naturales a pesar de sus impactos negativos en los territorios étnicos. Al respecto, desde el 2011, con la expedición del código minero, el gobierno colombiano viene otorgando títulos mineros a empresas nacionales e internacionales en territorios colectivos de comunidades afrocolombianas sin que se haya efectuado el derecho a la consulta previa. Una investigación realizada por el Observatorio Pacífico y Territorio señala que en la región Pacífico entre el 2002 y 2014, fueron entregados 270 títulos mineros a titulares como La Muriel Mining Corporation, Exploraciones Chocó Colombia, Anglo Gold Ashanti y Votorantim Metais Colombia, con el derecho de explotar materiales de construcción, minerales de cobre, níquel, molibdeno, plata, oro platino y otros.<sup>12</sup> Para los afrocolombianos las economías extractivas hacen del Pacífico una plataforma para la reproducción de la guerra y un escenario para la acumulación de un capitalismo por despojo.

Organizaciones y líderes sociales han denunciado ante el estado y organismos internacionales las afectaciones por la minería, entre las que destacan: cambios de la vocación productiva de los suelos que ponen en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos; contaminación de las fuentes hídricas y su impacto sobre la salud y la vida; vulneración al derecho a la libre movilidad en los territorios; así como la participación de grupos armados ilegales en la explotación de recursos naturales, como los yacimientos de oro, plata, platino y las fuentes de hidrocarburos (petróleo y carbón).

Grupos armados ilegales a costa de lo que sea se han encargado

de desplazar a familias y pueblos enteros a las zonas urbanas y rurales de los municipios del Pacífico. La acción armada es empleada para el control territorial y poblacional, como una fuente de financiación de sus actividades ilícitas y para satisfacer los intereses de las diversas fuerzas involucradas en la producción del capital. De manera específica, los desplazamientos forzados también han sido empleados para incrementar el control sobre zonas estratégicas para los cultivos de coca y las rutas terrestres y marítimas de tráfico de drogas.

Como consecuencia, el despojo de tierras y desplazamiento forzado no solo generan una expulsión física de los pobladores locales, sino también una degradación de los significados materiales y simbólicos de los territorios. Los ríos y costas, objeto de experiencias y prácticas territoriales comunitarias, son reapropiados por antiguos y nuevos grupos armados como rutas para el tráfico de drogas hacia los mercados de México y Centroamérica. En ese contexto la región es concebida como un campo de batalla y conflictos en la que permanecen experiencias impregnadas de miedos, angustias y percepciones de terror por parte de las personas que habitan dicho espacio.

De acuerdo con Ulrich Oslender en la región Pacífico, los recuerdos de las masacres, asesinatos colectivos, desplazamientos forzados y hostigamientos quedan impresos en los imaginarios de las personas y también de manera material en el paisaje.<sup>13</sup> Esto implica no solamente la expulsión física de los afrocolombianos de sus territorios, sino también la expulsión de un espacio vivido: el espacio de la experiencia material dotado de intersecciones simbólicas y culturales donde los grupos construyen relaciones de la vida cotidiana de forma diferencial y articulada.

En el Pacífico, las fronteras entre los grupos armados y las empresas que operan en la legalidad del estado se difuminan. Las economías extractivas, los cultivos ilícitos y la supresión de los derechos étnico-territoriales de los afrocolombianos se entrelazan. La expulsión de familias y pueblos enteros, la pérdida de derechos y la transformación del espacio vivido en geografías para la guerra son utilizados en la producción de nuevos espacios de reproducción

del capital. Esos espacios han sido conceptualizados por David Harvey como un “ajuste espacio-temporal” que, para el caso del Pacífico, implica la apertura de nuevos mercados destinados al tráfico de cocaína y comercialización de los recursos naturales en detrimento de las formas de organización social y territorial de los pueblos afrocolombianos. De esta manera el capitalismo con sus formaciones económicas legales e ilegales destruye espacios previamente producidos por los grupos sociales, modifica las dinámicas socioterritoriales que ahí convergen y transforma su fisionomía.

Las trayectorias de desplazamientos y migraciones de personas y comunidades enteras que viven en abyecta miseria y sus tierras son acaparadas por diversas fuerzas económicas bien pueden referir a dinámicas de expulsión de un espacio de vida:

Las prácticas materiales que subyacen a estas expulsiones a la vez que degrada a los gobiernos que vendieron y arrendaron la tierra, degrada la significación de la ciudadanía para la población expulsada -agricultores y artesanos- de sus aldeas, distritos manufactureros rurales y distritos de pequeños agricultores. Y cuando las minas y las plantaciones ocupan tierras donde no hay gente, degrada la tierra y el agua. De ahí que el territorio pasa a ser simplemente tierra en el caso de plantaciones, y tierra muerta en el caso de minas.<sup>14</sup>

En el Pacífico, la espacialidad de los manglares, costas y ríos devienen en instrumentos de los grupos armados para el establecimiento de economías criminales que, además de los cultivos ilícitos, incluyen también el tráfico de armas y de personas y la migración irregular. Las fuerzas económicas que convergen en la región con sus relaciones de producción y explotación de los recursos naturales y poblaciones, promueven formas cuantificables de eficiencia, productividad y competitividad que elimina, evacua y transforma todo lo que se le opone mediante la violencia. Situaciones que comúnmente derivan en la creación de un espacio liminal entre la vida y la muerte, o entre los espacios de la guerra y la sobrevivencia cotidiana, manifiestos en desplazamientos forzados, masacres y asesinatos selectivos, cuerpos

desmembrados y arrojados a los ríos, “casas de pique” en las que torturan y descuartizan los cuerpos y tierras acaparadas para los cultivos de coca.

### III. DESPOJOS Y NARCOTRÁFICO

La producción de conocimiento sobre el despojo está atravesado por la actual coyuntura política y económica de los países latinoamericanos, principalmente para enfatizar en como operan las políticas económicas de los gobiernos nacionales que declaran actividades extractivas como la minería, la extracción de hidrocarburos, la generación de energía eléctrica dirigidas a fomentar la inversión privada de empresas nacionales y extranjeras con el argumento de elevar el desarrollo económico del país.

El impacto de esas políticas económicas ha generado el acaparamiento de tierras y territorios, fenómeno que permite a las empresas realizar trabajos de exploración y explotación de los recursos naturales no renovables, así mismo pueden obtener permisos de concesión sobre las aguas para facilitar la extracción de oro, plata, platino e hidrocarburos, como los que intentan en Colombia, con el Acuerdo 02 del 2017 de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que avanza en la flexibilidad de actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos en el territorio nacional a cargo de compañías nacionales y provenientes de Canadá, Estados Unidos, China e India. En un ambiente de rechazo por parte de comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas que han visto afectadas las fuentes hídricas y economías locales, así como por la violación de derechos humanos, individuales y colectivos.

El despojo guarda relación con la noción de “acumulación por desposesión” propuesta por David Harvey<sup>15</sup> para hacer referencia al desarrollo de las fuerzas de producción capitalista y de su marco institucional y político en el contexto de una lógica organizadora del capital que incluye la extracción, explotación y mercantilización de bienes naturales y el acaparamiento de tierras, recurriendo para ello a medios legales e ilegales. Acumular sobre la base de la

desposesión se acompaña de violencias que provocan marginación, destrucción y expulsión de personas y pueblos enteros, principalmente en territorios estratégicos para la movilización del capital extractivo.

En Colombia el despojo ha estado asociado con el conflicto armado en el país. Durante y después de las negociaciones del estado con algunos grupos paramilitares entre el 2003 y el 2006, abrió el camino para señalar “el despojo de tierras y territorios” como un aspecto central de la guerra.<sup>16</sup> En el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras del 2011, un mecanismo que pretende reparar de manera integral a las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado por causa del conflicto armado, se interpreta que una de las modalidades de despojo utilizada por grupos armados es el desplazamiento forzado de personas y comunidades a través del ejercicio de la violencia o la coacción para el acaparamiento o uso de las tierras y territorios despojados. Utilizados, principalmente, para expandir los cultivos de coca.

Recientemente Colombia reporta un aumento significativo en la productividad de cocaína. Según el informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Colombia pasó de tener 188.000 hectáreas de coca en 2016 a 209.000 en 2017 y la producción de cocaína aumentó a las 1.976 toneladas, lo que representa un 25% más que en 2016.<sup>17</sup> La región Pacífico, concentra 65.567 ha, siendo la zona que alberga mayor cantidad de cultivos de coca en el país, representando un 38% del total de áreas sembrada para el 2017.

En la siguiente tabla se puede observar el crecimiento continuo de los cultivos de coca en los departamentos que conforman la región Pacífico:

### **Tabla 1. Cultivos de coca en la región Pacífico 2008-2017**

Departamento	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nariño	19.612	17.639	15.951	17.231	10.733	13.177	17.285	29.755	42.627	45.735
Cauca	5.422	6.597	5.908	6.066	4.325	3.326	6.389	8.660	12.595	15.960
Chocó	2.794	1.789	3.158	2.511	3.429	1.661	1.741	1.489	1.803	2.611
Valle del Cauca	2.089	997	665	981	482	398	561	690	752	1.261
<b>Total</b>	<b>29.917</b>	<b>27.022</b>	<b>25.682</b>	<b>26.789</b>	<b>18.969</b>	<b>18.562</b>	<b>25.976</b>	<b>40.594</b>	<b>57.777</b>	<b>65.567</b>

**Fuente:** Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

El aumento de los cultivos de coca en Colombia y la afectación a regiones como el Pacífico, podría ser entendida como parte de una dinámica de concentración en zonas en las que han permanecido cultivadas y se han expandido en últimos años, vinculado también ha factores socioeconómicos como la pobreza, la marginalidad y la débil e inadecuada intervención del Estado que favorece la presencia de grupos armados ilegales y el desarrollo de economías criminales.

Estudios recientes del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural han documentado que las subregiones de Alto Patía y Norte del Cauca, Pacífico medio y Pacífico sur presentan características de vulnerabilidad mas altas en relación con el resto de los municipios del país.<sup>18</sup> El Pacífico sur y su frontera con Ecuador es la subregión mas vulnerable y desconectada de la región Pacífico. Se compone de once municipios: Tumaco, El Charco, Magüi Roberto Payán, Olaya Herrera, Mosquera, Santa Bárbara-Iscuandé, Francisco Pizarro, La Tola, Barbacoas y Ricaurte. Tumaco destaca como uno de los municipios con mayor incidencia de pobreza multidimensional y concentra el número de cultivos de coca más grande en todo el país y el mundo. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos ha registrado 23.148 hectáreas que representan un 16% del total del país en el 2017 cifra histórica en la historia del narcotráfico en Colombia.

Ahora bien, el incremento exponencial de los cultivos de coca en Colombia y, en especial, en la región Pacífico, se asocia con el

crecimiento y acumulación del capital por despojo. De acuerdo con el estudio “El PIB de la cocaína 2005-2018: una estimación empírica” realizado por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes,<sup>19</sup> en 2018 la economía de la cocaína, asociada a la siembra de coca, a la producción de la base de cocaína y a la producción del clorhidrato de cocaína, produjo unos 18,3 billones de pesos (más de 5.130 millones de dólares) duplicando los ingresos de otros sectores de la economía nacional como el café que produjo 7 billones de pesos (1.996 millones de dólares).

Desde el 2015 se ha experimentado un importante aumento en las hectáreas cultivadas de hoja de coca y de la producción de clorhidrato de cocaína. Este aumento se ha dado pese a las mayores incautaciones realizadas, lo que ha encendido las alarmas frente al impacto de la economía ilícita en la economía nacional. En efecto, en el año 2017 las hectáreas sembradas se incrementaron en un 78% frente a las registradas en el año 2015, alcanzando una cifra récord de 171 mil ha, la cifra más alta registrada en el siglo XXI en Colombia.<sup>20</sup> El aumento significativo de la producción económica del narcotráfico en la economía nacional se corresponde con el recrudecimiento de las violencias que se viven en territorios como el Pacífico y otras regiones productoras o que sirven como corredor para el transporte de cocaína hacia mercados internacionales.

Lo anterior puede ser entendido, también, como parte de una dinámica de concentración cultivos ilícitos en zonas en las que han permanecido cultivadas antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Con la firma del Acuerdo de Paz parecía que se abría una nueva etapa que ponía fin a más de 50 años del conflicto armado interno. Sin embargo, en los departamentos que conforman la región Pacífico se ha presenciado la aparición y consolidación de nuevos grupos criminales que por medio de la violencia incentivan economías ilegales vinculadas a redes criminales transnacionales de tráfico de cocaína como el Ejército de Liberación Nacional (ELN),

el Clan del Golfo, los carteles de Sinaloa, Jalisco y Nueva Generación y la emergencia de las disidencias de las Farc (guerrilleros que no se acogieron al acuerdo de paz) sumados a grupos de excomandantes que recientemente anunciaron su decisión de retomar la lucha armada.

Importante es mencionar que, si bien los grupos armados colombianos han tenido el control de las aguas del Pacífico para la producción y comercialización de la cocaína, desde el comienzo del siglo los cárteles mexicanos gradualmente se hicieron de la dirección en el tráfico de la coca producida en el sur del continente.<sup>21</sup> Estas transnacionales del crimen organizado hacen presencia en las principales zonas de cultivo de coca y producción de cocaína e impulsan varias de las guerras entre actores armados que producen asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos, reclutamiento de menores, etc. A inicios del 2020, en el municipio de Tumaco, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC y el cartel de Sinaloa, generaron el desplazamiento forzado de 3.000 personas en el río Chagüi, una de las principales rutas para el tráfico de drogas hacia Centroamérica.

En los territorios del Pacífico antiguos y nuevos grupos armados se disputan dominar los corredores estratégicos y de movilidad que controlaban las FARC. Al respecto La Fundación Ideas para la Paz ha planteado tres hipótesis acerca de la presencia de estos grupos en la región y el aumento de los cultivos de coca:

1. La recomposición del narcotráfico en zonas de influencia de las FARC: en la costa pacífica nariñense y caucana grupos disidentes y antiguas redes de apoyo de las FARC con intermediarios de organizaciones de carácter transnacional y grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el clan del Golfo se han apropiado de las rutas de salida y distribución de la cocaína hacia los mercados de México y Centroamérica.
2. El fortalecimiento del Ejército de Liberación Nacional: en zonas como Argelia y El Tambo, Cauca, se han incrementado las áreas de siembra de la hoja de coca y se controla la



distribución de insumos químicos en la producción de clorhidrato de cocaína. En la zona costera, entre Timbiquí y Guapi hay intermediarios de carteles mexicanos, lo que explica la confluencia entre el ELN y disidencias de las FARC.

3. El aumento en la incautación de cocaína podría haber estimulado el crecimiento de los cultivos de coca: En 2017 las autoridades colombianas incautaron 435 toneladas de cocaína, la cifra más alta registrada desde 2008. Este aumento notable coincide con el incremento en los cultivos ilícitos de coca, tendencia que podría estar relacionada con efecto de compensación: el alza en el número de hectáreas podría ser la respuesta a la mayor efectividad por parte de las autoridades.<sup>22</sup>

A las tres hipótesis mencionadas se suma el hecho de que en el contexto de las actividades del narcotráfico los pobladores locales adquieren el valor como pequeños productores mediante la participación “voluntaria” o forzada en los cultivos de coca. O se dedican a los cultivos ilícitos y se los venden al grupo que controle la zona, o son asesinados, o se unen a los millones de colombianos, en su mayor parte afrodescendientes, indígenas y campesinos, que han huido a los grandes centros urbanos o al exterior huyendo de los grupos armados.<sup>23</sup> Por su parte, jóvenes, niños y niñas afrocolombianos son objetivo de reclutamiento forzado por parte de los grupos armados para suplir las bajas y deserciones de sus miembros, para incursionar en las actividades ilícitas, así como para engrosar las filas como comandantes de escuadra o combatientes regulares.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica en 60 años de guerra en Colombia, 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por los grupos armados legales e ilegales. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres.<sup>24</sup> El Centro estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares. En la mayoría de los jóvenes, niños y

niñas reclutados por los grupos armados, sin acceso a la educación ni oportunidades de ningún tipo, el tiempo productivo en las actividades del narcotráfico culmina en el aniquilamiento de su vida o dados de baja en enfrentamiento con las Fuerzas Militares o grupos rivales.

En el Pacífico, el despojo de tierras y territorios y los desplazamientos forzados atraviesa todo el entramado de relaciones sociales, políticas y económicas y es, por tanto, común a la acción estatal y no estatal. Los grupos armados, las economías del narcotráfico, las empresas multinacionales y el nuevo huracán de reformas neoliberales se articulan en una política de desposesión que pretende transformar en mercancía los paisajes, los pueblos y los recursos naturales. Estos pueden ser vistos como máquinas de guerra más interesados en fortalecer y expandir la productividad de economías criminales que en soluciones pacíficas al conflicto. De acuerdo con Achille Mbembe, en la formación de enclaves económicos en zonas en que se extraen recursos naturales y se despoja a comunidades locales, las máquinas de guerra están:

Implicadas en la constitución de economías altamente transnacionales, locales o regionales (...) Las máquinas de guerra se convierten rápidamente en mecanismos depredadores extremadamente organizados, que aplican tasas en los territorios y las poblaciones que ocupan y cuentan con el apoyo, a la vez material y financiero, de redes transnacionales.<sup>25</sup>

Los vínculos transnacionales de los grupos armados colombianos en asocio con carteles mexicanos son un claro ejemplo de las redes transnacionales en torno a la cadena productiva del narcotráfico y las violencias. Estos grupos generan fuerzas de expulsión con la tentativa de inmovilizar y neutralizar espacialmente a la población afrocolombiana, o disgregarla en geografías precarias que rebasan los límites del Estado nación. De este modo es importante reconocer a la región Pacífico en una situación de conflicto y de fricción que se revela en la expulsión de pueblos enteros y empobrecimiento de los territorios; pero también en los sentidos que sobre los proyectos de vida personal y colectivo construyen las

personas en contextos de expulsión.

#### IV. CONFINADOS EN LA EXPULSIÓN

En la costa pacífica nariñense los constantes enfrentamientos entre grupos armados han generado desplazamientos masivos de miles de familias afrocolombianas hacia la zona urbana del municipio de Tumaco. En este lugar grupos armados se disputan la apropiación de antiguos territorios controlados por las FARC, y ser los nuevos caciques de los cultivos de coca y la minería. A lo que se suma la presencia de cárteles mexicanos que han ganado terreno y se han apoderado del manejo de las rutas del narcotráfico en la costa nariñense. Lo que evidencia que estamos frente una criminalidad organizada con alcance transnacional que tiene como objetivo el control de tierras, territorios y poblaciones específicas.

La periodista mexicana Ana Lilia Pérez en su libro “Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico” (2014) realiza una exhaustiva investigación acerca de cómo opera el tráfico de drogas a nivel mundial. Según esta autora, los puertos del Pacífico colombiano están controlados por el cartel de Sinaloa y Los Zetas, como dueños de muchas embarcaciones pesqueras, lanchas rápidas y flotas navales marítimas completas que desde puertos colombianos envían toneladas de cocaína a diferentes lugares del mundo. Pérez los define como capitanes de mar y tierra, no solamente por el control de las rutas náuticas, sino también terrestre.

En Colombia se identifica al cartel de Sinaloa como dueño de barcos pesqueros que salen de Buenaventura cargados de cocaína, pero también de submarinos o semisumergibles que se desplazan desde Colombia y que vienen desde el trecho del río Amazonas. Otros cargamentos se bajan por la costa del Pacífico, pasando por el cañon de Garrapatas y los ríos y cosas de Chocó.<sup>26</sup>

Los carteles mexicanos en colaboración con socios colombianos que ayudan con los cultivos de la mata de coca y laboratorios para su procesamiento han expandido las rutas de la cocaína a países del continente africano como Guinea.<sup>27</sup> Esta economía en

expansión busca controlar los mundos de vida de los pueblos afrocolombianos que habitan en los puertos costeros, zonas ribereñas y barrios de baja mar. El desplazamiento forzado de la población local es la muestra más visible de este aspecto. Sin embargo, la ocupación de territorios para expandir economías criminales, también, restringe los movimientos cotidianos rutinarios de individuos y poblaciones enteras; generando un confinamiento espacial dentro de sus propios espacios de vida.

Sembrar minas antipersona; el control y empleo de fuerza de trabajo en los cultivos de coca; la prohibición de actividades tradicionales y restricción de horario; el reclutamiento forzado de menores; los bloqueos a misiones médicas y/o humanitarias; el permiso de circulación a personas específicas de los núcleos familiares; las masacres y exposición de los cuerpos en el espacio público, entre otras formaciones de violencias predatorias ejercidas por los grupos armados y narcotraficantes contribuye a la configuración de situaciones de confinamiento a la vez que permite disponer de los espacios del Pacífico como una ruta del narcotráfico. A través del Pacífico los cárteles colombianos y mexicanos han conquistado los mercados ilegales de tierras tan lejanas como Australia, las remotas islas Marschall o los puertos asiáticos.<sup>28</sup> Asimismo, han contribuido a hacer de Guinea el primer narco-estado del mundo, de España la bodega de droga en Europa, de Panamá el puente central para el narcotráfico interoceánico y de los diversos puertos mexicanos narco puertos (Acapulco, Campeche, Coahuila, Veracruz).

### **1. Desplazamientos forzados en la costa pacífica nariñense**

El desplazamiento forzado de la población afrocolombiana es el resultado más visible del conflicto armado interno y sus imbricaciones con las economías extractivas que se desarrollan en la región Pacífico. Estos movimientos pueden resultar en migraciones de corta distancia y duración en un mismo espacio geográfico, por ejemplo, hacia barrios urbanos o poblados cercados

en los que son recibidos por familiares o amigos. O pueden ser de larga distancia y duración, por ejemplo, hacia las grandes ciudades del país como Bogotá, Cali o Medellín. De igual manera, esos desplazamientos pueden ser a menor escala, con la huida de individuos o familias, o a escala masiva, con el éxodo de comunidades enteras.

En la costa pacífica nariñense el desplazamiento forzado se manifiesta de manera sistemática, masiva y prolongada a lo largo del tiempo. Según un informe de la Defensora del Pueblo entre enero y agosto del 2018 se han presentado 19 eventos de desplazamiento forzado masivo en el departamento de Nariño, que ha afectado a 2.409 familias afrocolombianas (7.441 personas) en los municipios de Roberto Payán (9 eventos), Magüi Payán (3 eventos), Tumaco (2 eventos), Olaya Herrera (2 eventos), Cumbal (1 evento), Mosquera (1 evento), El Charco (1 evento) y Barbacoas (1 evento).<sup>29</sup>

Entre enero y febrero de 2020, cerca de 4.000 personas (1.374 familias) del consejo Comunitario Unión Río Chagüi, en el municipio de Tumaco, fueron desplazados hacia la zona urbana del municipio por enfretamientos entre grupos armados. Algunas personas y familias que se resistieron al desplazamiento quedaron confinadas en sus territorios por medio a amancebas, represalias y asesinatos. Las personas y familias que llegan en condición de desplazamiento forzado a Tumaco, se relocalizan en asentamientos de bajamar situados en los márgenes del municipio, caracterizados por la desigualdad social extrema y carencia de servicios básicos en la que viven muchas familias afrocolombianas. Como señalan sus habitantes, los asentamientos de bajamar son terrenos que han sido “ganados al mar”, es decir, que antes eran ocupados por manglares o eran inundables por la marea y han sido rellenos con escombros o basura.

En los lugares de bajamar la gente ha construido viviendas palafíticas, levantadas sobre palos de mangles y organizado economías ligadas al mar y al manglar; creando asentamientos humanos que las autoridades locales todavía no han reconocido legalmente. En las últimas décadas, se han convertido además en

amplios receptores de la población desplazada proveniente de las zonas rurales de los municipios de Barbacoas y Buenaventura. No obstante, esas zonas también se han consolidado como lugares estratégicos para los grupos armados en el desarrollo de economías criminales que incluyen: extorciones a comerciantes, microtráfico de drogas, tráfico de armas, sicariato y reclutamiento forzado de jóvenes urbanos.

La débil o nula presencia del estado, las extensas zonas de manglares y salidas al mar facilita la incursión y el refugio de los grupos armados. Situación que le ha significado a la población desplazada una constante revictimización que tiende a perpetuar el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran.

En la costa nariñense los desplazamientos forzados tanto en la zona urbana como rural con frecuencia se establecen de manera pendular; es decir las familias se establecen en un lugar del que pueden ser nuevamente desplazados de acuerdo con las dinámicas de violencia que instauran los grupos armados. Esos desplazamientos en palabras de los pobladores locales son referidos como una *“población flotante”*, no solamente porque habitan en casas construidas en palafitos de madera sobre los ríos, manglares y el mar lo que genera que continuamente reubiquen sus viviendas a consecuencia de las inundaciones y subidas de marea, sino también porque producto de los enfrentamientos entre grupos armados y sus intimidaciones a las personas y familias, constantemente se van unos y llegan otros.

En los testimonios que se citan a continuación se evidencia las constantes experiencias de reubicación de la población desplazada. Sandra Martínez, salió desplazada en el 2016 de la vereda el Congal-Frontera, río Mira, después de que paramilitares asesinaran a su esposo, lo confundieron como perteneciente a la guerrilla de las FARC. Junto a sus tres hijos llegó al barrio Obrero en el municipio de Tumaco. En ese lugar con pocos recursos económicos construyó sobre una zona de manglar una pequeña casa palafítica con paredes y techo de plástico.

Como a los ocho meses de vivir en el barrio Obrero llegó un grupo armado a pedir vacuna por el “derecho a piso” a todos los

habitantes. Nos amenazaron que si no les entregamos el dinero nos iban a matar. No tuve otra opción que agarrar a mis tres hijos y desplazarme hacia el municipio de Magüi Payán.<sup>30</sup>

En Magüin Payan Sandra y sus hijos fueron hospedados en casa de su hermana mayor. Durante ese tiempo se organizó con otras mujeres para la extracción de la piangüa de los manglares y su venta en caseríos cercanos. En el 2018, los enfrentamientos entre grupos armados obligaron a Sandra a desplazarse nuevamente hacia la zona urbana de Tumaco. “Ahora estamos arrimados en la casa de una conocida de mi hermana. No se cuanto tiempo estaremos aquí, tampoco sé a donde iré”, refiere Sandra.

Hace cinco años que Eloísa Quiñones llegó desplazada del río Mejicano al barrio Nuevo Milenio, en Tumaco. Ella cuenta que ha este lugar han llegado familias desplazadas desde diversos sitios del Pacífico, como Barbacoas y Buenaventura, buscando oportunidades económicas y que se asentaron allí porque los precios del terreno en las zonas de bajamar eran muy bajos. Ella narra que compró un pedazo de manglar al señor Alfredo Ordoñez en 80.000 pesos (USD 30) y fue construyendo su hogar con palos que cortaba del manglar y techo de plástico.

Eloísa recuerda que, junto con sus vecinos, rellenaba las calles con bultos de aserrío o basura para ganarle tierra al agua y construyeron una red de puentes que comunicaba a las viviendas. Sin embargo, a los dos años de habitar su nuevo hogar grupos paramilitares, conocidos como Los Rastrojos, asesinaron a su hijo mayor y la obligaron a abandonar el barrio junto con su familia. “Al día siguiente que asesinaron a mi hijo salí huyendo junto con mis hijos a buscar refugio un barrio conocido como playa arreacha en una zona de bajamar”.<sup>31</sup>

En los relatos de Sandra y Eloísa, se observa como las personas y familias expulsadas de sus territorios de origen buscan reasentarse en los barrios de bajamar donde hacina una población empobrecida. Los manglares, inundaciones y carencia de servicios básicos como agua potable, electricidad y vías de comunicación, no son obstáculo para que las personas construyan sus nuevos lugares de residencia. Esto es una producción del espacio que

busca reorganizar la vida material y simbólica de la población desplazada en prácticas ligadas a las sobrevivencias cotidianas en geografías precarias; así sea de manera temporal, pues muchas de esas personas, familias y pueblos enteros continúan expulsados por las fuerzas económicas y armadas que hacen presencia en el Pacífico.

De esta manera, las expulsiones no ocurren solamente cuando las poblaciones son desplazadas de sus tierras; sino también cuando son confinadas a moverse en los márgenes: lugares donde se actualizan violencias históricas contra ellos, como la pobreza y el racismo estructural. Los márgenes configuran, además, “espacios de anonimatos” en que los rostros e historias de los expulsados son invisibilizados o deshumanizados. Los continuos movimientos de expulsión de los afrocolombianos es uno de los elementos que nos permite comprender la situación de esta población en una condición de “vidas precarias”, por utilizar el concepto de Judith Butler, al hacer referencia al estatus ontológico de ciertas poblaciones constituidas como destructibles y no merecedoras de ser lloradas y reconocidas, en lugar de ser reconocidas como poblaciones vivas necesitadas de protección contra la violencia ilegítima estatal, el hambre o la enfermedad.<sup>32</sup>

Los marcos mediante los cuales aprehendemos ciertas vidas como precarias operan generando ontologías específicas de los sujetos, en palabras de Butler “los sujetos se constituyen mediante normas de inteligibilidad, socialmente instauradas y mantenidas mediante prácticas reguladas de repetición e imitación, que producen y cambian”.<sup>33</sup> En este punto las narraciones y representaciones racistas contra el Pacífico como un lugar “atrasado” “primitivo” “aislado” sirven para marcar fronteras de la diferencia entre aquellas regiones y grupos sociales que son vistos como parte del estado y aquéllos que quedan excluidos de él; así como para legitimar su conquista y sometimiento por quienes se asumen así mismo como civilizados.

## V. CONCLUSIONES



Este trabajo ha demostrado que los conflictos en el Pacífico no se tratan de la clásica contradicción capitalista entre empresarios y trabajadores asalariados. Por el contrario, nos encontramos ante cíclicas expulsiones y dinámicas de despojos de tierras bajo la lógica de fuertes violencias que destruyen los mundos de vida de los pueblos afrocolombianos y reconfigura sus territorios en nuevos espacios ocupados por economías criminales y extractivas con sus modos de producción, explotación y dominación de los territorios y pobladores locales.

Los desplazamientos forzados se dan en escenarios de extremas violencias ejercidas por grupos armados de variada naturaleza. Estas violencias se fortalecen con las desigualdades sociales y políticas económicas extractivas que acaparan las tierras y territorios afrocolombianos como sitios nada más para la extracción de recursos naturales. De ahí que, los desplazamientos forzados no son el fin último; constituyen tan sólo el eslabón de nuevas expulsiones en geografías precarias. Los desplazamientos de personas y familias huyendo de la guerra ahora incluyen nuevas trayectorias: el norte de Chile. Antofagasta es el nuevo escenario para la llegada de cientos de afrocolombianos provenientes de Tumaco, Buenaventura y Barbacoas. En este lugar las personas están insertas como fuerza de trabajo en algunas de las dimensiones económicas que originaron la expulsión del lugar de origen; la minería, microtráfico de drogas y redes de prostitución.

Por su parte la población afrocolombiana desplazada que busca reasentarse en las grandes urbes, constantemente están siendo revictimizados como delincuentes y criminales, además de ser segregados a vivir en las periferias de estos territorios en los que opera una distribución inequitativa de las oportunidades.

Finalmente, es importante señalar que las expulsiones de la población afrocolombiana hacen parte de dinámicas globales que perpetua situaciones de racialización y marginación de los pueblos afrodescendientes a escala planetaria. En los últimos años la frontera que Colombia comparte con Panamá por el departamento del Chocó, Pacífico, ha sido una de las rutas para el tráfico de personas provenientes de diferentes países africanos que emprenden travesías con el fin de llegar a los Estados Unidos.

Pobladores locales del corregimiento de Acandí (Chocó) han informado a la Armada Nacional haber encontrado cuerpos de adultos, niñas y niños africanos flotando sobre el mar. Estas personas viajan en lanchas en condiciones inhóspitas. Con frecuencia las lanchas naufragan y con ello la pérdida de vidas humanas. El naufragio de africanos en el Pacífico colombiano es una extensión del naufragio de africanos en el mediterráneo tratando de llegar a las costas italianas.

Estamos ante una geopolítica de las expulsiones afrodescendientes que bien pueden relacionarse: personas y pueblos enteros expulsados del lugar de origen por las fuerzas globales de un capitalismo por desposesión y bajo la complacencia de una necropolítica de los gobiernos que controlan las tierra y territorios y, con ello, la administración masiva de poblaciones a través de una economía de la muerte a gran escala. Otro aspecto importante es que con frecuencia las rutas de desplazamientos y lugares de confinamiento de los afrodescendientes se establecen en espacios y lugares que han sido producidos histórica y políticamente a partir de prácticas racistas y donde se hacina una población excedente y expulsada de las configuraciones internas. políticas, económicas, culturales y sociales, de los Estados nación. En este sentido, los movimientos de expulsión afrodescendientes se desarrollan en dinámicas de idas y venidas en los márgenes del sistema mundo-capitalista.

## VI. BIBLIOGRAFÍA

- ARIAS VANEGAS, J y CAICEDO FERNÁNDEZ A, “*Etnografías e historias de despojo: Una introducción*”, Revista Colombiana De Antropología, año 2017, vol 1, pp. 7-20.
- BUTLER, Judith, *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia*, Buenos Aires, editorial Paidós, 2006.
- CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA, “Una guerra sin edad: Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, 2017”, Bogotá, CNMH, disponible en:

[http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2018/una\\_guerra-sin-edad.pdf](http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2018/una_guerra-sin-edad.pdf).

CENTRO LATINOAMERICANO PARA EL DESARROLLO RURAL, “Así son los territorios PDET del Pacífico colombiano” Bogotá, 2017, disponible en: <https://rimisp.org/noticia/asi-son-los-territorios-pdet-del-pacifico-colombiano/>

DAS, Veena y POOLE, Deborah, “El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”, *Cuadernos de Antropología Social*, Universidad de Buenos Aires, núm. 27, 2008, pp. 19-52.

DEFENSORÍA DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACION DESPLAZADA, “Dinámicas de desplazamiento, riesgo de desplazamiento y confinamiento”, Boletín informativo, núm 5, enero – agosto de 2018, Nariño, disponible en: <https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-agosto-Desplazados.pdf>

ESCOBAR, Arturo, *Territorios de la diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes.*, trad. de Eduardo Restrepo, Enviñon editors, Colombia, 2010, p. 48.

ESTÉVEZ, Ariadna, “Bolsones de desechabilidad: espacios de precariedad radical para migrantes en América Latina” 2019, disponible en: <https://medium.com/@ariadnaestvez/bolsones-de-desechabilidad-espacios-de-precariedad-radical-para-migrantes-en-américa-latina-882140dab17a>

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ, ¿Por qué siguen aumentando los cultivos de coca en Colombia? Bogotá, 2018, disponible en: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5ba2578da51e3.pdf>

HARVEY, David, “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005, disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf>

LA AGENCIA DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS, “Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2017”, disponible en: [https://www.acnur.org/publications/pub\\_inf/5c10f7164/desplazamiento-forzado-2017.html?query=desplazamiento%20forzado](https://www.acnur.org/publications/pub_inf/5c10f7164/desplazamiento-forzado-2017.html?query=desplazamiento%20forzado).

- MONTENEGRO, Santiago, et al., *El PIB de la Cocaína 2005-2018: Una Estimación empírica*, Colombia, Serie Documentos CEDE, Universidad de los Andes, 2019, p. 6.
- MBEMBE, Achille, *Necropolítica*, España, editorial Melusina, 2011.
- MUNERA, Alfonso, *El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810)*, Bogotá, Banco de la República, Áncora Editores, 1998.
- OBSERVATORIO PACÍFICO Y TERRITORIO, “Impactos de la minería en el Pacífico colombiano”, Editorial nuevo milenio, 2018, disponible en: [https://pacificocolombia.org/wp-content/uploads/2018/09/Impactos-de-la-mineri\\_a-en-el-paci\\_fico-colombiano-web.pdf](https://pacificocolombia.org/wp-content/uploads/2018/09/Impactos-de-la-mineri_a-en-el-paci_fico-colombiano-web.pdf)
- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, “Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017”, Bogotá, SIMCI-UNOD, 2018, disponible en: [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_Monitoreo\\_territorios\\_afectados\\_cultivos\\_ilicitos\\_2017\\_Resumen.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf)
- OLAYA REQUENE, Angela Yesenia, “La frontera entre Colombia y Ecuador: movilidades de comunidades afrocolombianas en escenarios del narcotráfico”, *Iberoforum*. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año XIV, No. 27, enero-junio 2019, pp. 175-208.
- PÉREZ, Ana Lilia, *Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico*, México, Grijaldo, 2014, p. 48.
- PROMOTORA ARQUÍMEDES S.A., “Puerto Marítimo de Tribugá”, 2006, disponible en: <https://arquimedes.com.co/>.
- SASSEN, Saskia, *Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global*, Buenos Aires, Argentina: Katz editors, 2016, p. 14.
- UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, “Reporte Único de Víctimas”, 2018, disponible en: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reportes>
- URLICH, Oslender, “Geografías del terror: un marco de análisis para el estudio del terror”, *Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Vol. XII, núm. 270, agosto de 2008, disponible en:

<http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-144.htm>

## Notas

- 1 Escobar, Arturo, *Territorios de la diferencia. Lugar, movimientos, vida, redes.*, trad. de Eduardo Restrepo, Envió editores, Colombia, 2010, p. 48.
- 2 La agencia de la ONU para los refugiados, “Tendencias Globales: Desplazamiento Forzado en 2017”, disponible en: [https://www.acnur.org/publications/pub\\_inf/5c10f7164/desplazamiento-forzado-2017.html?query=desplazamiento%20forzado](https://www.acnur.org/publications/pub_inf/5c10f7164/desplazamiento-forzado-2017.html?query=desplazamiento%20forzado).
- 3 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, “Reporte Único de Víctimas”, 2018, disponible en: <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/reportes>
- 4 Das, Veena y Poole, Deborah, “El estado y sus márgenes. Etnografías comparadas”, *Cuadernos de Antropología Social*, Universidad de Buenos Aires, núm. 27, 2008, pp. 19-52.
- 5 Estévez, Ariadna, “Bolsones de desechabilidad: espacios de precariedad radical para migrantes en América Latina” 2019, disponible en: <https://medium.com/@ariadnaestvez/bolsones-de-desechabilidad-espacios-de-precariedad-radical-para-migrantes-en-américa-latina-882140dab17a>
- 6 Sassen, Saskia, *Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la economía global*, Buenos Aires, Argentina: Katz editores, 2016, p. 14.
- 7 *Ibidem*, p. 15
- 8 En México, miles de migrantes de origen camerunés han quedado confinados en los llamados Centros de Detención Migratoria en zonas fronterizas, que bien pueden ser interpretados como “espacios de confinamiento”, ese conjunto de movilidad restringida, inactividad forzada y dependencia en campamentos y otros asentamientos segregados, donde hacían poblaciones expulsadas tanto de sus tierras como de las fuerzas económicas que acaparan esos lugares.
- 9 Munera, Alfonso, *El fracaso de la nación. Región, clase y raza en el Caribe colombiano (1717-1810)*, Bogotá, Banco de la República, Áncora Editores, 1998.
- 10 Escobar, Arturo, *op. cit.*, p. 48
- 11 Promotora Arquímedes S.A., “Puerto Marítimo de Tribugá”, 2006, disponible en: <https://arquimedes.com.co/>.
- 12 Observatorio Pacífico y Territorio, “Impactos de la minería en el Pacífico colombiano”, Editorial nuevo milenio, 2018, disponible en: <https://pacificocolombia.org/wp-content/uploads/2018/09/Impactos-de-la-mineria-en-el-pacifico-colombiano-web.pdf>
- 13 Ulrich, Oslender, “Geografías del terror: un marco de análisis para el estudio del terror”, *Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Vol. XII, núm. 270, agosto de 2008, disponible en: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-270/sn-270-144.htm>
- 14 Sassen, Saskia, *op. cit.*, p. 98.
- 15 Harvey, David, “El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión”, Buenos Aires,

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2005, disponible en:  
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf>

16 Arias Vanegas, J y Caicedo Fernández A, “Etnografías e historias de despojo: Una introducción”, Revista Colombiana De Antropología, año 2017, vol 1, pp. 7-20.

17 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “Informe de Monitoreo de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2017”, Bogotá, SIMCI-UNOD, 2018, disponible en:  
[https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia\\_Monitoreo\\_territorios\\_afectados\\_cultivos\\_ilicitos\\_2017\\_Resumen.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Colombia/Colombia_Monitoreo_territorios_afectados_cultivos_ilicitos_2017_Resumen.pdf)

18 Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, “Así son los territorios PDET del Pacífico colombiano” Bogotá, 2017, disponible en: <https://rimisp.org/noticia/asi-son-los-territorios-pdet-del-pacifico-colombiano/>

19 Montenegro, Santiago, et al., *El PIB de la Cocaína 2005-2018: Una Estimación empírica*, Colombia, Serie Documentos CEDE, Universidad de los Andes, 2019, p. 6.

20 *Idem*, p. 6

21 Pérez, Ana Lilia, *Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico*, México, Grijaldo, 2014, p. 48.

22 Fundación Ideas para la Paz, ¿Por qué siguen aumentando los cultivos de coca en Colombia? Bogotá, 2018, disponible en:  
<http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5ba2578da51e3.pdf>

23 Olaya Requene, Angela Yesenia, “La frontera entre Colombia y Ecuador: movilidades de comunidades afrocolombianas en escenarios del narcotráfico”, *Iberoforum*. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. Año XIV, No. 27, enero-junio 2019, pp. 175-208.

24 Centro Nacional de Memoria Histórica, “Una guerra sin edad: Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano, 2017”, Bogotá, CNMH, disponible en:  
[http://www.centrodehistoria.gov.co/descargas/informes2018/una\\_guerra-sin-edad.pdf](http://www.centrodehistoria.gov.co/descargas/informes2018/una_guerra-sin-edad.pdf)

25 Mbembe, Achille, *Necropolítica*, España, editorial Melusina, 2011, p. 62.

26 Pérez, *op. cit.*, p. 91

27 Pérez, *op.cit.*, p. 333

28 *Idem*.

29 Defensoría Delegada para los Derechos de la Poblacion Desplazada, “Dinámicas de desplazamiento, riesgo de desplazamiento y confinamiento”, Boletín informativo, núm 5, enero – agosto de 2018, Nariño, disponible en:  
<https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Boletin-agosto-Desplazados.pdf>

30 Entrevista personal a Sandra Martínez, Tumaco, Nariño, 19 de enero de 2019.

31 Entrevista personal a Eloísa Quiñones, Tunaco, Nariño, 17 de febrero, 2019.

32 Butler, Judith, *Vida precaria: el poder del duelo y la violencia*, Buenos Aires, editorial Paidós, 2006, p. 17.

33 *Idem.*